

## HUCHIM

Lo grave no es la especulación sobre un atentado contra el jet de Mouriño, sino la existencia de condiciones que hacen creíble su perpetración.

## Atentado

EDUARDO R. HUCHIM

Irremediablemente, hay una percepción dominante: Juan Camilo Mouriño Terrazo, José Luis Santiago Vasconcelos y los demás ocupantes del pequeño jet de Gobernación que se desplomó en las Lomas de Chapultepec, perecieron a consecuencia de un atentado cuya autoría se sitúa en el narcotráfico. Y salvo pruebas contundentes en contrario, ésa será la percepción que prevalecerá, a pesar de la versión oficial de accidente y de hipótesis creíbles como la que sitúa al avión en la estela de turbulencia ("wake turbulence") generada por las maniobras de un Boeing 767-300 (César Cepeda, *Reforma*, 6 y 7/11/08).

Para llegar a conclusiones definitivas, es manifiesta la necesidad de aguardar el resultado de las investigaciones, cuya acuciosidad y transparencia deben seguir la ruta marcada inicialmente por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler: no ocultar nada. Sin embargo, ante la corrupción y la descomposición de los cuerpos de seguridad a causa de los dineros del narcotráfico, la tesis del atentado no es trivial ni descartable, menos aún en una sociedad como la mexicana, tan proclive a imaginar conspiraciones. Si han sido infiltrados los mandos policiales y aun algunos militares —como nos enteramos casi a diario—, ¿por qué habría de ser imposible hacer caer un avión en pleno vuelo? Si los sicarios del narco asesinan a jefes policiales y militares día tras día, al grado de que sus muertes ocupan espacios cada vez más breves en la prensa hablada y escrita, ¿no es lógico pensar que la disyuntiva delincencial de plata o plomo navega viento en popa y produce condiciones propicias para el sabotaje? Dicho de otro modo, lo grave no es la especulación sobre un atentado contra el jet de Gobernación, sino la existencia de hechos y condiciones suficientes para creer fundadamente en la posibilidad de su perpetración.

De cara a la infiltración de los cuerpos de seguridad, el gobierno ha hablado de "limpiar la casa", como si tal aseo dependiera de la sola voluntad gubernamental, como

si hubiera quienes pudieran ocuparse, más allá de toda duda, de tal hercúlea tarea. La ineficacia policial y militar, por corrupción o por déficit de capacidades, ha generado una sensación de impotencia social ante la delincuencia organizada. La sociedad mexicana, sobre todo en ciertas ciudades y zonas, es presa de un temor creciente, ante el hecho incontrovertible de la reducción del número de policías confiables —preventivos, investigadores y perseguidores—, porque o son asesinados o se someten a la seducción de las dádivas millonarias.

Ante la fuerza de los hechos, el desafiante discurso triunfalista no es creíble y, en cambio, invita a pensar en la creciente incapacidad del gobierno para cumplir su función esencial de garantizar la seguridad de los gobernados. Esta patente incapacidad debiera llevar a revisar la política guerrillera contra el narcotráfico y, como he sostenido repetidamente, plantearse el gobierno y plantear ante la comunidad internacional la conveniencia de enfrentar el consumo de drogas como un problema de salud pública y no de policías y delincuentes, es decir, en sentido contrario a la acción y la retórica prevalecientes hasta ahora.

Esa retórica gubernamental ha convertido a Mouriño Terrazo, cuya muerte trágica es ciertamente lamentable, en un habitante del santoral político. Su desempeño en Gobernación es valioso para el Ejecutivo, pero muchos dudan si lo fue para el país; las acusaciones en su contra fueron documentadas, no calumniosas como quiere el Presidente, y las bienaventuranzas que éste exaltó en las exequias de su amigo son aplicables a quienes padecen el poder político y económico, no a quienes lo ejercen y lo disfrutan.

Si bien el respeto al luto y el dolor familiares no permite detallar ahora lo que Felipe Calderón Hinojosa llama calumnias, la tragedia no debe borrar la memoria. Y ante la santificación laica del caído —explicable entre nosotros, tan devotos de la necrofilia—, reclama elogio el valor que el Presidente concede a la amistad. Y debe extrañarse en él la mesura, virtud encomiable en un jefe de Estado, sobre todo en sus actos públicos.



Continúa en siguiente hoja

Fecha <b>10.11.2008</b>	Sección <b>Primera</b>	Página <b>17</b>
----------------------------	---------------------------	---------------------

◆ **OMNIA**

El gobierno del Distrito Federal se entrometió grosera y abiertamente, por conducto de la consejera jurídica Leticia Bonifaz Alfonzo, en la designación de la presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal, y al hacerlo acabó con lo que quedaba de autonomía en el IEDF, todo ello en un marco de pasividad de la complaciente Asamblea Legislativa, que abdicó de sus atribuciones y se limitó a validar lo que se había decidido en el GDF. Marcelo Ebrard Casaubón está

mostrando una malsana tendencia al control ilegítimo de instituciones, lo cual vulnera no sólo autonomías sino también el principio de división de poderes. Pese a todo, es preciso evitar la descalificación a priori de Beatriz Claudia Zavala Pérez, cuyo éxito dependerá en buena medida de liberarse de la tutela de su maestra y promotora y en evitar que una malentendida colegialidad la convierta en rehén de sus pares.

*Correo electrónico: [omnia08@gmail.com](mailto:omnia08@gmail.com)*